

VIOLENCIA EN GUATEMALA Y EL SALVADOR: UNA POSIBLE VIA DE SOLUCION

JESUS MARIA GARCIA AÑOVEROS
Instituto de Cooperación Iberoamericana

El agudo problema de la violencia en Guatemala y El Salvador generalmente recibe un trato defectuoso y suele estar plagado de equívocos, silencios, ocultaciones, contradicciones, que desfiguran la verdadera naturaleza social e histórica del fenómeno, con la inevitable consecuencia de confundir a la opinión pública y propiciar soluciones radicales que significan la eliminación de una de las partes del conflicto.

Indudablemente, el caldo de cultivo de la violencia reside en unas estructuras agrarias que consagran una injusta participación de la propiedad de la tierra, la formación de un poderoso y reducido grupo que controla el poder económico y político, el abandono social de la casi totalidad de la población campesina que vive en unas circunstancias de miseria y necesidad, unos sistemas productivos que están muy por debajo de una productividad y rentabilidad aceptables y una dependencia excesiva del exterior debido al monocultivo de productos de exportación.

La violencia, como respuesta a esta situación injusta, ha existido a lo largo de la historia de ambos

países, aunque, a partir de la década de los cincuenta asume unas características especiales: por un lado, la violencia se intensifica y se convierte en un fenómeno habitual en las relaciones sociales; por otro lado, la conciencia de la opresión sufrida y la posibilidad de un cambio socioeconómico que elimine las estructuras injustas la aviva considerablemente.

A este radical cambio en la violencia han contribuido fundamentalmente el marxismo y el cristianismo liberador. El marxismo, mediante su teoría del materialismo histórico, ha sido el instrumento histórico que ha dado una respuesta «científica» al hecho de las estructuras opresoras, ha activado la conciencia del oprimido frente al opresor, ofrece los medios concretos de la lucha de clases y toma del poder y, finalmente, promete un modelo de sociedad nueva socialista que acabará con todo tipo de injusticias y opresión. El cristianismo liberador, que tiene su expresión ideológica en la teoría de la liberación, propugna, en nombre del evangelio y concretamente de la caridad cristiana, la lucha por un cambio radical de estructuras en Latinoamérica a través incluso de la violencia, buscando una sociedad justa, que, por regla general, se identifica con el modelo socialista.

Aquí es donde surge un primer equívoco, al confundir las causas de la violencia. Se oye decir con relativa frecuencia que la raíz de la violencia que se vive actualmente en Hispanoamérica se debe a la propagación del marxismo en amplios sectores de la sociedad y a las prédicas liberadoras de un sector de los religiosos y sacerdotes, que han conseguido modificar la conciencia de una buena parte del campesinado, convirtiéndolo en violento y revolucionario. Se oculta el hecho histórico de que la raíz de la violencia en Guatemala y en El Salvador reside en un fenómeno estructural injusto y no en el marxismo y el cristianismo liberador, los cuales, seguramente, apenas habrían tenido incidencia en sociedades más justas. Lo cual tampoco nos puede hacer olvidar que, tanto el mar-

xismo como el cristianismo liberador, han sido unos incentivos formidables que han avivado decisivamente el rescoldo, ya viejo y nunca sofocado, de la violencia.

Se suele contraponer la violencia ejercida por los revolucionarios a la violencia ejercida desde el poder: la primera sería una violencia justa e incluso heroica, pues su finalidad última es la consecución de una sociedad justa sin explotadores y explotados, mientras que la segunda está radicalmente descalificada, pues tiene como meta el sostenimiento de una sociedad esencialmente injusta. Sin duda alguna que hay que descalificar y rechazar la violencia ejercida por un poder despótico y brutal que, mediante los instrumentos de fuerza armada de que dispone, se resiste a todo cambio racional de las estructuras y las relaciones sociales, forzando la pervivencia de un modelo de sociedad caduco, injusto y antihumano, como es el actual en los pueblos que venimos analizando. Todas las denuncias serán pocas para poner fin a ese ejercicio del poder arbitrario y restarle todos los apoyos posibles. Pero la aceptación de esta realidad tampoco nos puede arrastrar a admitir simplemente como buena la violencia ejercida por los movimientos revolucionarios.

Ante la violencia ejercida por los movimientos guerrilleros surgen una serie de cuestiones e interrogantes que se suelen silenciar y ocultar. En primer lugar está la cuestión de si los medios utilizados no entrañan situaciones injustas, con lo que se pretendería llegar a un fin justo mediante acciones injustas. Cuando la guerrilla sabe muy bien que su entrada en una aldea, buscando ayuda o simplemente haciendo propaganda, produce a continuación la acción del ejército o la policía, que, como represalia, diezmará la población, y se tiene, además, conciencia de que esa represión del pueblo es positiva para el movimiento revolucionario, pues provoca un movimiento de rechazo al poder y a sus fuerzas armadas y, como contrapartida, un sentimiento de aceptación de las fuerzas guerrilleras, es evidente que hay una utilización e instrumentalización

del pueblo a quien se pretende liberar. Se cae en la contradicción de liberar al pueblo, pero a costa de la sangre del pueblo. Lo lógico y humano sería contar con la aquiescencia del pueblo que se quiere liberar en cuanto a si acepta la espiral de terror y violencia en que se va a encontrar envuelto al entrar en contacto con los movimientos revolucionarios armados. Pero la realidad es que esta aquiescencia no se pide, sino que se supone por los que se arrogan una representatividad del pueblo, ya que, en definitiva, la revolución, nos vienen a decir, tiene sus exigencias y alguien las tiene que pagar, aunque sea a costa de la sangre del pueblo. Se olvida que el fin ya está en los medios, o mejor, que los medios ya son fin, por lo que desde ya surgen serias dudas de si será posible construir una sociedad justa sobre montañas de cadáveres del pueblo. Hay, a pesar de los fines loables que se puedan perseguir, una manipulación previa del pueblo y difícilmente podrán construir una sociedad justa aquellos que anteriormente no han tenido reparo en manipular al pueblo a quien quieren liberar. Creo que la historia de los pueblos prueba suficientemente que, cuando se utilizan medios injustos e ilícitos para un cambio revolucionario, las sociedades resultantes distan mucho de convertirse en las soñadas por los revolucionarios: el ejemplo más hiriente y actual lo ofrecen las sociedades socialistas, que se quedan muy lejos del modelo soñado por sus promotores.

Desde luego, no se trata de valorar con los mismos criterios la violencia desarrollada por los movimientos revolucionarios que la violencia desatada por el poder oligárquico. Pienso que es absurda la postura de aquellos que, colocándose por encima de lo que es la realidad humana y social, se dedican a condenar la violencia venga de donde venga. Cualquier observador puede comprobar que la vida, tanto en un plano oligárquico como social, lleva consigo una buena porción de violencia y lo más que podemos hacer es luchar para que las cotas de violencia sean lo más aceptables

posible para el hombre. Por otro lado, no se pueden comparar dos tipos de violencia cuyas finalidades son tan distintas, pues mientras que una, con todos los defectos inherentes, quiere ser camino para construir una sociedad más humana y mejor, la otra sólo persigue la perduración de una sociedad injusta y explotadora. Igualmente, hay que comprender y respetar a bastantes personas que, llenas de ideales, están exponiendo sus vidas por transformar un tipo de sociedad alienante para su pueblo.

Se puede objetar, como de hecho se hace, que a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y a su negativa a realizar las transformaciones sociales necesarias, no cabe otra respuesta que la violencia del pueblo a través de los movimientos armados; la situación se ha tornado insoportable y no cabe esperar más tiempo. Y aquí es donde surge uno de los más graves equívocos. ¿Es que no existe otro camino sino el de la insurrección armada para lograr las ansiadas transformaciones? Desgraciadamente, se ha caído en un maniqueísmo social como si no existiera más que una única vía para realizar los necesarios cambios estructurales: la de la violencia armada. La derecha a ultranza no quiere cambio alguno sustancial y, con toda la fuerza que le otorga el poder político y militar que posee, se opone por todos los medios violentos; es la vieja oligarquía terrateniente que no quiere perder sus viejos privilegios económicos. La izquierda revolucionaria, consciente de su gran fuerza popular y militar, lucha abiertamente por un cambio radical de estructuras, teniendo como meta un modelo socialista.

Sin embargo, tanto unos como otros están cerrando conscientemente otras posibles vías de solución, como sería un cambio a fondo en las estructuras dentro del modelo capitalista. Este camino reformista, a pesar de lo desprestigiado que está el término, es buscado también por una corriente política que tiene apoyos populares, pero que actualmente está sofocada por el poder de la extrema derecha y de la izquierda re-

volucionaria. Muchos de sus dirigentes han sido perseguidos y asesinados por la reacción, se les acusa de «comunistas», y, frecuentemente, son olvidados y despreciados por la izquierda radical, que los acusa de «reaccionarios». Se sitúan penosamente entre los dos fuegos de la violencia extrema, propugnando una solución política y no violenta al conflicto en un intento de que cedan las dos partes enfrentadas en sus radicales pretensiones y den paso a las reformas necesarias. Hoy por hoy, la vía reformista tiene pocas posibilidades de salir adelante, pues tanto la extrema derecha como la izquierda se consideran lo suficientemente fuertes para no ceder en sus posturas maximalistas: los primeros todavía poseen mucha fuerza, y los segundos se atrincheran en sus avances y en la convicción de que a medio plazo el poder va a ser suyo, por lo que rechazan tajantemente toda solución reformista.

El problema de la violencia en esos países no hay que verlo exclusivamente desde el interior de los mismos, sino también a través de la instrumentalización proveniente del exterior. Es indudable que la violencia está siendo manejada por intereses externos y que, en parte, es una resultante del enfrentamiento entre los dos bloques, socialista y capitalista, a nivel mundial, y, de manera especial, de Estados Unidos y la Unión Soviética. Son áreas de fricción entre intereses opuestos que agravan considerablemente la violencia que de por sí está generada por unas estructuras injustas. Es indudable que ambas potencias podrían hacer mucho para buscar una solución razonable y no violenta al conflicto, pero da la sensación de que están jugando, cada uno por su lado, la carta de la solución violenta y maximalista, al menos de momento y mientras la coyuntura y correlación de fuerzas no cambie. Aparte de las grandes potencias, también están teniendo una incidencia indirecta en la violencia ciertas instituciones y movimientos progresistas de Occidente que no

ocultan sus simpatías y apoyos por los movimientos revolucionarios.

El cristianismo liberador parte de una interpretación del evangelio, al menos parcialmente discutible. Una cosa es que la caridad cristiana impulse al creyente a la lucha contra la injusticia y la explotación y otra cosa son los medios utilizados y los fines a conseguir. Que los medios violentos sean exigidos por el amor cristiano para cambiar una sociedad injusta no está tan claro, pues un análisis sin prejuicios del evangelio quizá nos lleve a la conclusión de que, precisamente, los medios a utilizar deben ser pacíficos. Considerar que las sociedades capitalistas son esencialmente malas y que, por tanto, la sociedad exigida por el evangelio tiene que ser socialista, creo que es salirse del campo de los principios cristianos para caer en el discutible campo de la sociología.

A la problemática que se deriva de las estructuras injustas y explotadoras de Guatemala y El Salvador y la consiguiente violencia desatada, caben tres respuestas: la pervivencia de los actuales sistemas y estructuras; un cambio radical y revolucionario del modelo de sociedad, y un conjunto de reformas estructurales y sociales modernizadoras del país.

Es evidente que el modelo actual de sociedad que ofrecen ambas Repúblicas es rechazable y urgen cambios serios y profundos. No se puede permitir la lenta agonía de unos pueblos campesinos que viven en condiciones realmente inhumanas y de abandono. La derecha oligárquica, que no admite cambio alguno, está llamada al fracaso a medio plazo y, probablemente, van a perderlo todo por no querer ceder en nada. Si fueran medianamente inteligentes, ellos mismos buscarían los cambios necesarios que, a la larga, incluso les reportarían beneficios. Pero es una derecha que vive en un estado esquizofrénico que no les deja ver la realidad social que les rodea. En parte cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, y ello les hace sentirse más fuertes de lo que en realidad son. Pretenden

ignorar que si los Estados Unidos les apoyan no es tanto porque la opinión americana esté de acuerdo con las brutales injusticias que viven sus países, sino porque, de momento, los norteamericanos, entre elegir sistemas dictatoriales dependientes de ellos y modelos socialistas opuestos al modelo capitalista, se quedan, como un mal menor, con los primeros. Pero si la coyuntura cambiara, la extrema derecha en el poder perdería el apoyo de los Estados Unidos.

La izquierda revolucionaria, organizada en movimientos guerrilleros armados, intenta hacerse con el poder para implantar una sociedad de corte socialista. Pero, enfrascados en la dura lucha que tienen que sostener, piensan más en las necesidades del momento que en el futuro de una sociedad nueva. De hecho, sus planteamientos acerca del modelo socialista a implantar está lleno de buenas intenciones, incluso de utopías, de declaraciones de principios, los cuales, un día, si toman el poder, chocarán con la dura realidad social de sus pueblos. Se puede hablar de reparto de riquezas, pero sin olvidar que más allá del reparto y condicionándolo hay unas estructuras de productividad arcaicas y de muy baja rentabilidad, cuya problemática es mucho más grave que la del necesario reparto. Se puede hablar de hacer un hombre nuevo que va a vivir siempre con conciencia social; lo malo es olvidar que eso del hombre nuevo tiene mucho de utopía, pues el hombre es cultural e incluso biológicamente más «viejo» de lo que podemos pensar. Se puede dividir a los hombres entre buenos y malos, explotadores y explotados; sin embargo, todos los hombres tienen algo de ambas cosas. Es fácil ofrecer un futuro de sociedad socialista en donde no quepa la opresión; pero la historia es necia y deshace pronto los sueños de los hombres; de hecho, las sociedades socialistas que conocemos han fracasado en lo fundamental de los fines que perseguían. Se pueden hacer prédicas cristianas llamando a la lucha contra la injusticia y la opresión y clamando por un cambio radical de la sociedad, pero se

olvida que se pueden favorecer situaciones de violencia que son lo más opuesto al evangelio. Creo que honradamente nos podemos hacer la pregunta de si los movimientos guerrilleros son tan liberadores como pretenden serlo, pues los modelos de sociedad que persiguen ofrecen muchas dudas al respecto; no es lo mismo destruir que construir. A veces se tiene la sensación de que la izquierda revolucionaria, en su afán de cambiar y suprimir las estructuras injustas, se olvida de que los cambios sociales tienen un proceso histórico necesario y que forzarlos supone a la larga un retroceso e incluso la negación del modelo social perseguido. Los movimientos revolucionarios deben pensar que otras potencias exteriores están instrumentando su lucha y que, tarde o temprano, les pasarán la debida factura. Necesariamente, toda instrumentación, de una manera u otra, influye negativamente en los fines liberadores que se propugnan. Un ejemplo desgarrador de ello lo tenemos en el caso de El Salvador. Se ha escrito que en diciembre de 1980, aprovechando el golpe de los militares encabezados por Majano y que pilló de sorpresa a la extrema derecha del país, se trataron de realizar diversas reformas estructurales y, entre ellas, una reforma agraria; se estuvo a punto de llegar a un acuerdo con importantes movimientos guerrilleros para buscar una salida política al conflicto, aprovechando la buena disposición de los militares y civiles en el poder para poder llevar a cabo reformas estructurales en profundidad, algo que ya se comenzó a hacer al promulgarse la reforma agraria; el pacto fue abortado por las presiones cubanas sobre los movimientos guerrilleros, ya que este tipo de solución, por lo visto, no convenía a la política cubana en el continente.

La solución reformista, defendida por sectores políticos medios de la población que rechazan vigorosamente las estructuras injustas que gravan a sus respectivos pueblos y también se oponen a la instauración de un modelo de sociedad socialista, defiende progra-

mas de reformas a fondo con la finalidad de modernizar e industrializar el país, obtener un mejor reparto de las riquezas, aumentar y diversificar la productividad agrícola, atender convenientemente las necesidades culturales y sociales del pueblo y conseguir de este modo una sociedad más justa; el punto clave de las reformas tendría su base en la reforma agraria. Pero la solución reformista tiene un pasado bastante negativo, pues, hasta la fecha, las diversas reformas agrarias iniciadas en Guatemala y El Salvador, o bien fueron abortadas apenas fueron puestas en funcionamiento, como ocurrió en Guatemala en 1954, o bien no pasaron del papel, como ocurrió en El Salvador, aunque en este país la última reforma agraria parece que progresa en medio de enormes dificultades. Estos fracasos han creado la conciencia de que no es posible reforma agraria alguna por medios políticos y pacíficos, por lo que necesariamente se impone la lucha armada. Sin embargo, se trata de otro equívoco, pues el hecho de que las reformas anteriores no pudieran dar frutos —no por sí mismas, sino porque fueron interrumpidas violentamente por la oligarquía terrateniente— no quiere decir que no merezca la pena intentarlas de nuevo por cauces políticos. Las circunstancias sociales actuales no son las mismas que las de entonces ni interna ni externamente, y, desde luego, son mucho más propicias para un cambio en las estructuras agrarias. La actitud, por ejemplo, que tomaron los Estados Unidos apoyando en Guatemala la contrarreforma agraria en 1954, hoy día, referida a ese campo, es impensable. Lo que sucede, en el fondo, es que la solución reformista, como se indicó anteriormente, en estos momentos, no conviene a la izquierda revolucionaria, pues le quitaría en gran parte su razón de ser y es rechazada por el grupo oligárquico en el poder, al menos en Guatemala, y las exigencias de la política internacional obligan a las grandes potencias a mantener el conflicto. Sin embargo, a mi juicio, es la solución que hay que defender y apoyar, pues, tanto des-

de el punto de vista cultural como económico y social, es la más conveniente para los pueblos de Guatemala y El Salvador, la más razonablemente posible, y, sobre todo, la que menos costo en vidas humanas supone. No creo que los campesinos de esos países estén preparados para un modelo socialista de la explotación de la tierra, así como tampoco están dispuestos a soportar por más tiempo las estructuras que los oprimen. Estos países necesitan generar riqueza y una ayuda considerable en capitales para su desarrollo agrícola e industrial, que sólo les vendrá en cuanto ofrezcan sistemas sociales estables, no radicalizados. Pienso que en la mentalidad campesina del pueblo caerían bien unas medidas que respetaran la propiedad privada de la tierra, pero con todos los correctivos socializantes necesarios. Unas reformas estructurales profundas, dentro del sistema capitalista, serían, hoy por hoy, las que mejores garantías ofrecerían a esos pueblos para diversificar su producción agrícola, aumentar la productividad, industrializar el país y crear la infraestructura necesaria que elevara el nivel cultural y las condiciones sociales del pueblo.

Pero, por encima de todas estas consideraciones, debemos acercarnos al pueblo de Guatemala y El Salvador, ese sufrido, instrumentalizado y vejado pueblo del que unas fuertes minorías se arrogan la representatividad y por cuya causa dicen luchar, unos para liberarlo y otros para que nada cambie. Unos pueblos que están pagando diariamente con su sangre los resultados de un enfrentamiento inhumano y cruel, cuyo protagonismo se les escapa de las manos. Cuando se contemplan los grados de barbarie, de sadismo y de desprecio de los más elementales derechos del hombre que las oligarquías en el poder están llevando a cabo; cuando se advierte la irresistible espiral de violencia avivada por los movimientos revolucionarios; cuando esos países están caminando a su destrucción material, a un deterioro enorme en las relaciones sociales, a un hundimiento cultural sin precedentes..., ciertamente hay

que pensar que el costo humano y material es excesivo y no guarda proporción con los fines que se desean conseguir por muy elevados que éstos sean. Hay que preguntarse si realmente merece la pena seguir en esa lucha sangrienta en la que, mírese por donde se mire, el gran perdedor está resultando ser el mismo pueblo. Es el momento de buscar una solución política y negociada al conflicto y propiciar unos cambios profundos en las estructuras, pero que no suponga un cambio radical revolucionario. Quizá esas condiciones sean las más propicias en El Salvador, en donde se ha visto la imposibilidad de una victoria unilateral y se está entrando en una lucha endémica, larga y de desgaste con consecuencias tan negativas para el pueblo; también se da la circunstancia de que ciertos elementos que desean reformas estructurales a fondo están en el gobierno, en una mezcla, por cierto difícil de entender, con facciones del ejército y de las fuerzas de seguridad opuestas a todo cambio, pero que, indudablemente, son signo de un resquebrajamiento en el poder omnímodo acaparado hasta hace poco por la oligarquía terrateniente. En Guatemala, la coyuntura política favorable a una salida negociada quizá todavía no esté lo suficientemente madura, ya que el poder político sigue exclusivamente en manos de la oligarquía terrateniente, que cuenta con todo el aparato del ejército y las fuerzas de seguridad frente a unas guerrillas, si no unidas, al menos con mucha fuerza política y militar que ya domina extensas zonas agrarias del país, mientras que las fuerzas políticas que propician una reforma en profundidad de las estructuras se encuentran bastante marginadas del poder y de los medios necesarios para propiciar un cambio; es difícil predecir cuál pueda ser la evolución futura, pero es muy probable que, a corto plazo, la situación se convierta en tan caótica e insostenible para el mismo pueblo que necesariamente haya que encontrar una solución negociada que propicie las reformas necesarias; las guerrillas creen que la toma del poder es cuestión de

tiempo, mientras que el ejército afirma que acabará con toda la oposición armada; pero, seguramente, ni unos ni otros van a conseguir lo que pretenden y, tarde o temprano, se llegará a una situación de estancamiento que no servirá sino para aumentar los sufrimientos y la sangre del pueblo.

Ahora es el momento oportuno de que las naciones europeas, así como los movimientos y organizaciones progresistas occidentales que apoyan a los movimientos revolucionarios, cuyos intereses no están implicados tan directamente en la confrontación, con un sentido humanitario y teniendo en cuenta los cambios sociales que mejor pueden servir a dichos países, hagan todo lo posible para contribuir a una solución negociada de la crisis. España, indudablemente, no puede quedar al margen, sino todo lo contrario, de estos intentos, pues su influencia puede ser de enorme valor en una salida razonable. De lo contrario, la tragedia sufrida por los pueblos salvadoreño y guatemalteco, casi con toda seguridad, pronto se verá ampliada a los vecinos pueblos de Honduras y Costa Rica.